



Columna



Felipe Pávez

presidente de la Cámara Chilena de la Construcción sede Osorno

Una urgencia que exige nuevos acuerdos

El desarrollo de una región no se sostiene sólo en buenas intenciones. Se sostiene en infraestructura: caminos en buen estado, hospitales oportunos, redes sanitarias modernas, espacios públicos de calidad y equipamiento que acompañe el crecimiento urbano. Cuando el presupuesto público se vuelve insuficiente,

“No se trata de reemplazar al Estado, sino de complementarlo”.

lo que se resiente no es sólo la inversión; se afecta directamente la calidad de vida de las personas y la competitividad del territorio. Hoy enfrentamos una restricción fiscal evidente. Las demandas sociales crecen, los estándares son más altos y las carteras de proyectos se amplían, pero los recursos no siempre avanzan al mismo ritmo. Esta brecha obliga a abrir una conversación seria sobre cómo financiamos y ejecutamos la infraestructura que nuestras regiones necesitan.

En ese contexto, el modelo de inversión público-privada no es una consigna ideológica, sino una herramienta concreta. La experiencia del sistema de concesiones en Chile ha demostrado que, cuando existe un marco regulatorio claro, reglas estables y adecuada fiscalización, es posible acelerar proyectos estratégicos sin comprometer la responsabilidad fiscal del Estado.

Promover este modelo implica fortalecer la planificación de largo plazo, priorizar iniciativas con alto impacto social y generar certeza jurídica para atraer inversión. También supone un Estado moderno, capaz de diseñar contratos equilibrados y supervisar su cumplimiento con rigor técnico.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción Osorno creemos que la infraestructura no puede quedar sujeta exclusivamente a los ciclos presupuestarios anuales. Necesitamos una visión regional de desarrollo que combine recursos públicos, capital privado y una gestión eficiente. Obras como hospitales, conectividad vial, soluciones hídricas o equipamiento urbano pueden estructurarse bajo esquemas colaborativos que distribuyan riesgos y aceleren su materialización.

No se trata de reemplazar al Estado, sino de complementarlo. Se trata de entender que el crecimiento y el bienestar requieren alianzas inteligentes. La infraestructura es inversión social y productiva al mismo tiempo. Postergarla tiene costos que muchas veces son invisibles, pero profundos.

El desafío está sobre la mesa. Si queremos una región más integrada, competitiva y equitativa, debemos avanzar hacia modelos de colaboración que permitan transformar proyectos en realidades concretas. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a dar ese paso con responsabilidad y visión de futuro.